



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

Medellín, junio 22 de 2022

Radicado: 05001- 31- 05-**021-2016-00635-01**
Demandantes LEISI YOVEIMAR ECHAVARRÍA SÁNCHEZ
Demandados COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COLABORAMOS
SALUD Y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMFENALCO ANTIOQUIA
Asunto: CONTRATO REALIDAD - PRESTACIONES

La Sala Sexta de Decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia, la que se emite de forma escrita atendiendo las premisas de la Ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

A través de la acción judicial, pretende la actora la declaratoria de una única relación laboral con el empleador Comfenalco entre el 14 de octubre de 2008 y el 10 de enero de 2014, donde la CTA Colaboramos Salud fungió como simple intermediaria. Bajo esta premisa reclama el reconocimiento de prestaciones

sociales, reajuste salarial, derechos laborales e indemnizaciones causados desde el hito inicial hasta el momento en que se suscribió el contrato directamente con COMFENALCO.

Como respuesta a la acción Comfenalco expuso que la señora Echavarría Sánchez inició una vinculación laboral con esta entidad entre el 16 de agosto de 2011 y el 10 de enero de 2014, la que culminó por mutuo acuerdo, momento en que se suscribió una transacción.

Expuso que este ente es ajeno a la CTA Colaboramos Salud, entidad con la que se suscribieron varios contratos comerciales para la prestación de servicios en el programa EPS Régimen Contributivo de Comfenalco, siendo la CTA la encargada de realizar las tareas con sus asociados, sin que se configurara solidaridad en las obligaciones con estos.

En sentencia que desató la primera instancia, el A quo, tras determinar que no existe duda de la vinculación laboral con COMFENAL entre el 16 de agosto de 2011 y el 10 de enero de 2014, declaró que previo a tal vinculación la señora Echavarría Sánchez prestó servicios para esta accionada bajo una intermediación con la CTA accionada, figura que se usó de forma irregular en tanto no se cumplieron los requisitos de la naturaleza del trabajo asociado; por el contrario se demostró que esta entidad no era propietaria de los medios de producción, no había un sistema de autogestión, no se encargó de la realización de un proceso para un resultado específico; por el contrario se demostró que la CTA realizaba las labores en instalaciones y con herramientas de Comfenalco, sin que se demostrara el alquiler de ellos.

Expuso que no se probó el ánimo de autogestión dentro de la CTA, por el contrario la actora obraba bajo las órdenes determinadas y controladas por Comfenalco realizando una labor propia de la prestadora de servicios de salud, y no se trataba de la delegación de una actividad completa, sino que era una tarea inherente a la

función de Comfenalco, por lo que ha tenerse que la actora fue trabajadora dependiente de Comfenalco.

En cuanto a la excepción de prescripción determinó que al haber culminado la relación laboral el 10 de enero de 2014, quedaron afectados los emolumentos causados antes del mismo día y mes del año 2011, por lo que procedió a cuantificar aquellas prestaciones causadas entre el 10 de enero y el 15 de agosto de 2011 (momento de inicio de la relación directa con Comfenalco) salvo las cesantías, cuya exigibilidad esta dada por la terminación del contrato de trabajo, sin que declarara la prosperidad de la excepción de compensación.

Inconforme con la decisión fue recurrida por la accionada Comfenalco, insistiendo en que previo al 16 de agosto de 2011 no se presentaron los elementos constitutivos de una relación laboral Comfenalco, en tanto la actora fungía como asociada a la CTA accionada, reprochando la prueba de la subordinación, pues si bien se aludió a que algunos trabajadores de Comfenalco interactuaban con la actora estos no tenían funciones de coordinación sino que servían como puentes para la prestación del servicio sin potestad de subordinar, ni disciplinar.

Refirió que la CTA usaba las sedes y elementos de trabajo de Comfenalco en razón a un contrato de comodato.

En cuanto a las condenas por emolumentos laborales, refirió que estas fueron canceladas por la CTA, así lo aceptó la actora y lo aseveraron los testigos, sin que haya lugar a un doble pago.

ALEGATOS

Concedido el término establecido en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, ninguna de las partes presentó escrito.

CONSIDERACIONES

Previo al análisis, en el presente evento resulta relevante poner de presente que se encuentra por fuera de discusión que: **1)** entre la señora Leisi Yoveima Echavarría Sánchez y Comfenalco existió una relación laboral con ocurrencia entre el 16 de agosto de 2011 y el 10 de enero de 2014, la que culminó por convenio entre las partes y en cuya vigencia fueron satisfechas todas las obligaciones laborales, lo que se acredita con el contrato de trabajo y su liquidación (fls. 51/53), el acuerdo de transacción (fls. 58) así como las aclaraciones de la acta dentro de la diligencia del 1° de octubre de 2019 donde advierte que no se reclama ninguna acreencia de esta relación laboral (minuto 12), **2)** que entre Comfenalco y la CTA Colaboramos Salud se formalizó un convenio comercial para la prestación a la primera de los servicios para el proceso y subprocesos de atención de actividades de promoción y prevención, diagnóstico y tratamientos de los afiliados a la EPS Comfenalco, con efectos a partir del 20 de junio de 2008 y por tiempo indefinido (fls. 55/57)

Así las cosas, atendiendo a los reparos de la pasiva habrá de analizar la corporación si la demandante fue trabajadora subordinada de la Caja de Compensación Comfenalco al igual que la procedencia de pago de prestaciones sociales y beneficios laborales.

Pues bien, en el presente evento donde se pretende la declaración de existencia de una relación de naturaleza laboral, es relevante hacer hincapié en que, de conformidad a la Ley 79 de 1988, las Cooperativas de Trabajo Asociado, son empresa asociativa sin ánimo de lucro, cuyo objeto es el generar empleo para los asociados, desarrollando actividades económicas, profesionales o intelectuales orientadas a la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios y distribuyendo conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.

Es así que tanto los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, reintegrando sus excedentes a los mismos cooperados en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, así como destinándolos a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos sociales.

Se genera entonces una modalidad de trabajo, con una prestación personal y retribuida del servicio; donde el asociado realiza unas actividades pero bajo un modelo de autogestión orientada por la misión del ente solidario, bajo los estatutos y no se encuentra mediada por el elemento de subordinación, ya que la gestión se ejerce de forma conjunta y organizada por todos los asociados. Es esta la línea que marca la diferencia con la relación laboral, la que comporta un vínculo jerarquizado, de sometimiento a las reglas y directrices de un empleador.

En este sentido, debe tenerse presente que si bien se admite que estos entes contraten la ejecución de una labor a favor de terceras personas, no puede utilizarse este tipo de vinculación de forma fraudulenta para disfrazar la existencia de una verdadera relación subordinada, en desmedro de los derechos de los trabajadores asociados, evadiendo los pagos de derechos laborales legítimamente causados dentro de una verdadera relación subordinada al servicio de una persona natural o jurídica (CSJ SL 6441 de 2015, que reitera lo expuesto en la sentencia de radicado 25713 de 2006)

Uso indebido de las CTA que no cuenta con respaldo jurídico y es reprochable de cara al objetivo que persiguió la ley al permitir el funcionamiento de esos entes cooperativos, es así que de acreditarse una intermediación laboral se entenderá que el beneficiario de la labor es el empleador, haciendo a la CTA responsable de las acreencias laborales, así lo indican los artículos 16 y 17 del Decreto 4588 de 2006:

Artículo 16. Desnaturalización del trabajo asociado. El asociado que sea enviado por la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado a prestar servicios a una persona natural o jurídica, configurando la prohibición contenida en el artículo 17 del presente decreto, se considerará trabajador dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficie con su trabajo.

Artículo 17. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios temporales. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes.

Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado.

Normas que buscan una protección al trabajador y el respeto a las acreencias que se generan en desarrollo de una actividad laboral dependiente, donde más allá de las formas utilizadas, nombres o incluso la creación de personas jurídicas independientes, se disfraza una prestación de servicio para evadir responsabilidades laborales. Al respecto la Sala de Casación de la CSJ en providencia SL 4565 de 2021, rememora los dichos de la sentencia SL 4479 de 2020 así:

Si la empresa prestadora no actúa como un genuino empresario en la ejecución del contrato comercial base, bien sea porque carece de una estructura productiva propia y/o porque los trabajadores no están bajo su subordinación, no se estará ante un contratista independiente (art. 34 CST) sino frente a un simple intermediario que sirve para suministrar mano de obra a la empresa principal; o dicho de otro modo, se interpone para vincular formalmente a los trabajadores y ponerlos a disposición de la empresa comitente. Estos casos de fraude a la ley, conocidos en la doctrina como «hombre de paja» o falso contratista, se gobiernan por el artículo 35 del

Código Sustantivo del Trabajo, en virtud del cual la empresa principal debe ser catalogada como verdadero empleador y la empresa interpuesta como un simple intermediario que, al no manifestar su calidad, debe responder de manera solidaria.

Por tanto, si bien la tercerización laboral es legítima, lo que no es legal es que a través de dicha figura las empresas se desprendan de sus plantillas para entregarlas a terceros que carecen de suficiente autonomía empresarial, bien sea que adopten la forma de cooperativas de trabajo asociado, sociedades comerciales, sindicatos (contrato sindical), empresas unipersonales, asociaciones u otro tipo de estructuras jurídicas.

Con las premisas expuestas se descende **al caso concreto** hallando acreditada la prestación personal de un servicio remunerado de la actora en favor de la Caja de Compensación Comfenalco, en el periodo comprendido entre el mes de octubre de 2011 y el 10 de enero de 2014, vinculación que, entre el hito inicial y el 15 de agosto de 2011 se ocultó bajo una contratación irregular con la CTA Colaboramos Salud entidad que sirvió como simple intermediaria en tanto el verdadero empleador lo fue la accionada Comfenalco. Para arribar a tal conclusión la entidad se valió de la prueba recaudada, así:

Fueron escuchados los testigos **Natalia Andrea Holguín, Astrid Elena Naranjo, Luz Cristina Saldarriaga y Gustavo Trujillo Aramburo**, quienes al unísono refirieron que previo al año 2011 Comfenalco prestaba la atención en los laboratorios Biosigno a través de personal vinculado por Cooperativas de Trabajo Asociados, empero las tareas siempre fueron realizadas en las instalaciones de la EPS y con su instrumental.

En cuanto a las tareas desempeñadas por la accionante, las **declarantes Natalia Andrea Holguín y Astrid Elena Naranjo** expresaron que Leisi Echavarría fue su

compañera de trabajo en el laboratorio biosigno de Comfenalco, donde aquella realizaba funciones de toma de muestras a pacientes de esta EPS. Señalaron que las tareas se realizaban en una jornada impuesta por la EPS entre las 6 y 10 am y cuyos turnos eran asignados por Marta Saldarriaga, una bacterióloga empleada de Comfenalco, quien fungía como coordinadora de su tarea, de quien recibían instrucciones, a ella se le informaban las novedades como permisos e incapacidades, además que era ella quien autorizaba la planilla donde se reportaban las horas extras.

Señalaron estas testigos que debían porta uniforme, que era una bata que tenía la insignia de “Biosigno” y que dentro del lugar de prestación del servicio no había personal de la CTA que coordinara su trabajo en tanto todo se realizaba a través de la bacterióloga Marta Saldarriaga y que si bien en cada sede o laboratorio contaban con una profesional bacterióloga contratada por la CTA, esta no ejercía un poder subordinante, sino que era necesario para la toma de algunas muestras específicas, como citologías.

Respecto a la remuneración recibida de la CTA siempre entendieron que era el salario que fue pagado por la CTA dejando constancia en una colilla, mientras que el trabajo adicional era pagado por Comfenalco previa autorización del reporte por parte de Marta Saldarriaga, refiriendo que siempre recibieron las compensaciones anuales, semestrales y por descanso.

En cuanto a la terminación de la vinculación con la CTA, la testigo Astrid Elena Naranjo refirió que en una reunión se les informó que pasarían a trabajar para Comfenalco, migración que operó para muchos de las personas de la CTA (tiempo de la audiencia 1:09:00)

A su turno **Luz Cristina Saldarriaga Calderón y Gustavo Trujillo Aramburo**, personal administrativo de Comfenalco refirieron que la labor de la actora en el

área de laboratorio era bajo la supervisión de la CTA, empero al indagársele por la forma de asignación de labores indicaron que Comfenalco tenía un modelo donde se utilizaban coordinadores como puentes para el correcto funcionamiento.

Fue así que Luz Cristina Saldarriaga afirmó que dentro del modelo había una persona que hacía el enlace con la CTA, la coordinadora en el laboratorio era Marta Saldarriaga, que aseguraba la prestación y calidad del servicio de manera oportuna, pertinente y acompañaba la gestión, expresó desconocer los turnos de trabajo de la CTA, sin embargo refirió que estos debían estar articulados con la coordinadora Marta Saldarriaga quien asignaba los turnos y el coordinador de la CTA designaba las personas, aclarando que para efectos de ausencias laborales el conducto regular era enterar a Marta Saldarriaga, quien luego se ponía en contacto con la CTA. (minuto 50 de la audiencia)

Igual referencia hizo el testigo Gustavo Trujillo quien indicó que Comfenalco tenía un modelo para definir las condiciones de modo, tiempo y lugar de prestación de servicio, que se garantizaba a través de los coordinadores de Comfenalco, desconociendo si en el laboratorio permanecieran coordinadores de la CTA (tiempo de la audiencia 1:21:00).

Ahora en cuanto a los extremos de esta vinculación, se cuenta con el histórico de cotizaciones a la AFP Protección que registra para la señora Echavarría Sánchez aportes con la CTA Colaboramos salud desde el mes de octubre de 2008(23 días para tal ciclo), hasta agosto de 2011 (fls. 15/18)

Con estos elementos de prueba se revela con suficiencia que la participación de la CTA solo fue instrumental y aparente, en tanto la actora no actuaba bajo un modelo de autogestión o por lo menos bajo la coordinación de la empresa solidaria a la que pertenecía; por el contrario se acreditó que las labores de la señora Echavarría Sánchez respondían a la misión de la EPS Comfenalco, quien proveía la planta

física para la labor, suministraba los elementos de trabajo, uniformaba al personal con distintivos de su laboratorio, además que se encargaba de la gestión y coordinación de las labores, sin que se acepten las explicaciones de la pasiva al catalogarlo como un modelo de gestión, en tanto en la práctica se ejercían típicas funciones de control, vigilancia y subordinación, tales como la fijación de horario, autorización de ausencias laborales, aprobación de pago de trabajo suplementario e identificación a través de uniforme.

Vínculo disfrazado que tuvo ocurrencia entre el mes de octubre de 2008 y el 15 de agosto de 2011, día anterior a la formalización de la relación laboral con Comfenalco, por tanto ajustada fue la conclusión del A quo quien declaró que fue esta accionada el verdadero empleador, donde la CTA Colaboramos Salud actuó como simple intermediario, lo que lo hace responsable solidario en el pago de las acreencias laborales generadas.

En cuanto a las retribuciones propias del contrato de trabajo, consideró el A quo que solo habría lugar a exigir aquellas causadas con posterioridad al 10 de enero de 2011, en tanto las anteriores estaban afectadas por la prescripción extintiva, salvo lo referente a las cesantías, ocurrencia del fenómeno extintivo que no fue controvertido por las partes por tanto se mantienen incólume.

En adición consideró el fallador de instancia que no habrían de tenerse como válidos los pagos realizados por la CTA Colaboramos Salud en tanto correspondían a conceptos disímiles, consideración que no comparte esta corporación.

Debe tenerse presente que el principio de realidad sobre las formas inspira todas las esferas de las vinculaciones entre los sujetos, por tanto no puede utilizarse de forma parcial en favor de una de ellas y negarse para la otra. Bajo esta premisa

ha de reconocerse que si en virtud de una prestación de un servicio se reconocieron unos emolumentos que en su periodicidad y cantidad se asimilan a aquellos que se generan en una relación laboral, pese al nombre que hayan adoptado no hay lugar a desconocerlos e imponerlos nuevamente, en tanto es la misma prestación del servicio la que se remuneró, además que las normas que refieren a las consecuencias de la intermediación laboral no castigan tal situación irregular con el doble pago del servicio, al respecto la sentencia SL 2927 de 2020:

“La censura reprocha que el Tribunal hubiera confundido los pagos efectuados en razón del vínculo asociativo, con los reclamados bajo la premisa de existencia de un contrato de trabajo. Estima que ello se opone a la responsabilidad endilgada a las accionadas, la irrenunciabilidad de los derechos laborales y la garantía de acceso a la justicia.

Para resolver, cumple memorar que al ocuparse de situaciones similares a la aquí estudiada, esta Corporación ha asentado lo siguiente:

Ahora, respecto de la excepción de compensación que alegaron en su favor la Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna y la institución educativa, es preciso señalar que no le asiste razón al demandante en cuanto afirma que no puede confundirse el pago de compensaciones que recibió en virtud de los acuerdos de trabajo asociado con los salarios y prestaciones sociales y, por tanto, se le adeudan estas obligaciones laborales. Ello porque tales pagos se generaron por la misma prestación de servicios que desarrolló a favor de la Universidad Cooperativa de Colombia, de modo que es procedente declarar próspera tal excepción, como acertadamente lo estableció el juez plural.

(CSJ SL5595-2019)

De acuerdo con este criterio, lo relevante es establecer si el servicio prestado en virtud de un contrato de trabajo realidad, fue remunerado en debida forma. Es decir, el principio de primacía de la realidad sobre las formas no se opone a que el juez del trabajo comprenda que se trata de una única labor la que debe ser compensada. Por el contrario, mal haría aquel en no apreciar en su total dimensión el contexto en el que se ejecutó el vínculo. Esto incluye, a no dudarlo, los valores entregados al trabajador bajo las condiciones establecidas en su momento.

En este caso, conforme a las pretensiones de la demanda con la precisión realizada en la diligencia del 1° de octubre de 2019 referente a la satisfacción de todos los emolumentos posteriores al 16 de agosto de 2016 la actora reclama de Comfenalco el pago de los derechos laborales causados con anterioridad a tal data; empero con su interrogatorio de parte **se generó una confesión**, toda vez que al ser cuestionada por el pago de las compensaciones por parte de la CTA refirió haberlas recibido y para refrendar tal satisfacción se le indagó específicamente por las compensaciones mensuales, anuales, semestrales y de descanso y aceptó haberlas recibido, explicando que las compensaciones anuales se le consignaban directamente en su cuenta (tiempo de la audiencia minuto 18)

Pago que fue validado por la testigo Astrid Elena Naranjo quien afirmó que la CTA pagaba las compensaciones mensuales, anuales, semestrales y de descanso (tiempo de la audiencia 1:11:00)

Compensaciones que comparten su periodicidad con los derechos laborales reclamados, de donde las cesantías representan el emolumento anual, las primas el semestral y la compensación de vacaciones el descanso, quedando así establecido que si hubo un pago de estos beneficios, sin que la actora discuta que hubo un reconocimiento deficitario, por tanto habrá de entenderse que estos fueron cubiertos por la CTA, operando así la excepción de pago, dando lugar a la revocatoria de la condena por estos.

No así respecto a las cesantías, cuya satisfacción se cumple con el traslado a un fondo de cesantías, lo que no se cumplió pues como informó la actora este se pagaba directamente por consignación a su cuenta de ahorros, lo que riñe con la forma de cumplimiento de este deber, lo que genera que el empleador deba satisfacer tal obligación.

Causadas por el periodo comprendido entre el 14 de octubre de 2008 y el 15 de agosto de 2011 con un salario base de \$544.250, para el año 2011 que fuera declarado por el A quo como un promedio de los SBC en el sistema de pensiones, el que no fue discutido por las partes.

Sin embargo, si se aprecia una diferencia en el monto de esta prestación y sus intereses, asunto que al ser inherente al tema de apelación permite su revisión y recálculo sumas que fueron halladas tomando como salario el promedio informado en el histórico de cotizaciones a la AFP Protección para cada anualidad (fls. 15/18) y no de forma global como lo realizó el A quo y respecto a los intereses a las cesantías, solo se reconocen las causadas entre el 10 de enero y el 16 de agosto de 2011 por efectos de la prescripción extintiva declarada por el A quo, así:

| Año | Salario promedio | N° días | Sub total | Intereses a las cesantías | |
|-------|------------------|---------|--------------|---------------------------|-----------|
| 2008 | \$ 501.666 | 78 | \$ 107.205 | | |
| 2009 | \$ 518.917 | 365 | \$ 518.917 | | |
| 2010 | \$ 517.666 | 365 | \$ 517.666 | | |
| 2011 | \$ 544.250 | 226 | \$ 336.988 | 7.26% | \$ 24.263 |
| TOTAL | | | \$ 1.480.776 | | |

Total cesantías: \$1´480.776, intereses a las cesantías: \$24.263.

Resta por indicar que se confirma la condena en costas en primera instancia a cargo de la Caja de Compensación Comfenalco, entidad que también asumirá las costas en segunda instancia al no encontrar fundados todos los reparos de su apelación; se tasan las agencias en derecho en la suma de \$200.000.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, REVOCA EL NUMERAL TERCERO DE LA SENTENCIA** impugnada, en su lugar se declara la prosperidad de la excepción de pago respecto a los conceptos de prima legal y vacaciones y **MODIFICA EL NUMERAL CUARTO** de la sentencia indicando que se adeuda por concepto de

cesantías: \$1'480.776 y como intereses a las cesantías: \$24.263. En lo demás se confirma la sentencia confutada.

Costas en ambas instancias a cargo de la Comfenalco, en esta se tasan las agencias en derecho en la suma de \$200.000.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto.

Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

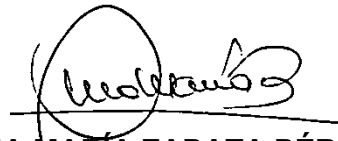
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001- 31- 05-**021-2016-00635-01**
Demandantes LEISI YOVEIMAR ECHAVARRÍA SÁNCHEZ
Demandados COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COLABORAMOS
SALUD Y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMFENALCO ANTIOQUIA
DECISIÓN: MODIFICA Y CONFIRMA
Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 28 de junio de 2022 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO